



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA:	PROCESO ORDINARIO LABORAL
ASUNTO:	APELACIÓN DE SENTENCIA
DEMANDANTE:	FRANCISCO ELADIO VELASQUEZ GUTIERREZ
DEMANDADOS:	CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. e INTELSE S.A.S.
RADICADO:	050013105 004 2011 1100 02
ACTA No	35

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante en el proceso promovido por **FRANCISCO ELADIO VELASQUEZ GUTIERREZ** en contra de **CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. e INTELSE S.A.S.**

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 35** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA¹

El demandante pretende se declare que la relación laboral de carácter verbal existente entre el señor FRANCISCO y las sociedades INTELSE S.A.S y CASTELL CAMEL S.A. es la de un verdadero contrato de trabajo de carácter indefinido. Como consecuencia de ello se condene de manera solidaria al pago de los salarios, indemnización por despido injusto y prestaciones sociales por el lapso 14 de abril a 10 de agosto de 2011 sobre una base salarial de \$3.600.000.

Para sustentar sus pretensiones afirmó en síntesis: **i)** Laboró desde el 14 de abril hasta el 10 de agosto de 2011 bajo contrato de prestación de servicios de carácter verbal como ingeniero hidrosanitario, labores que prestó de manera personal, subordinada y con

¹ Páginas 1 a 6 del PDF 003 /carpeta de primera instancia

remuneración o pagos por su servicio bajo horario establecido de medio tiempo todos los días, con una asignación mensual de \$1.800.000, sin embargo, el medio tiempo se convirtió en tiempo completo y hubo días en que laboró hasta 10 horas. Era citado todos los días a las 7 am en la Estación de Policía de Laureles y otros días a las 8 am en la Estación de Policía de Caldas donde se realizaban las obras para las que como ingeniero realizaba. Las funciones consistían en asesoría hidrosanitaria en las construcciones de las dos estaciones de Policía, siendo la contratante CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. quién subcontrató con INTELSEER S.A.S. y esta a su vez contrató al demandante. El beneficiario de la obra era FORPO - Fondo Rotatorio de la Policía-. ii) Afirma que no recibía subsidio de transporte, ni alimentación, ni fue afiliado la seguridad social, le adeudan los pagos correspondientes a todo el tiempo trabajado a razón de \$1.800.000 medio tiempo, pero realmente son \$3.600.000 porque laboraba tiempo completo menos un anticipo que se le hizo de \$1.400.000. El contrato terminó sin justa causa cuando el patrono INTELSEER S.A.S. dio la orden verbal de no seguir laborando hasta tanto la CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. pagara el resto del contrato suscrito.

2. LAS CONTESTACIONES

2.1. LA CONTESTACIÓN DE CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. ²

La sociedad se opuso a las pretensiones señalando que celebró contrato estatal con el Ministerio de Defensa - Fondo Rotatorio de la Policía, cuyo objeto era la elaboración de levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, obras exteriores, urbanismo de las estaciones de policía ubicadas en el Municipio de Caldas (Antioquia) y en el barrio Laureles en Medellín (Antioquia), por lo que contrató con INTELSEER S.A.S. la asesoría hidrosanitaria a quien le pagó la suma de \$30.691.205. Fue enfática en señalar que nunca celebró contrato alguno con el demandante.

Propuso como excepciones de mérito INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, PAGO DE LO NO DEBIDO, FALTA DE VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA DEMANDA, INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD.

2.2. INTELSEER S.A.S.³

Esta sociedad se encuentra representada por curador *ad litem* quien contestó manifestando no constarle ninguno de los hechos. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.

3. LA SENTENCIA⁴

² Páginas 1 a 8 del PDF 013 /carpeta de primera instancia

³ Página 1 a 4 PDF 027 /carpeta de primera instancia

⁴ PDF 51 /carpeta de primera instancia

Mediante sentencia del **18 de enero de 2018**, el *a quo* tomó las siguientes decisiones: i) DECLARAR que entre la sociedad INTELSEER S.A.S. y el señor FRANCISCO ELADIO VELÁSQUEZ GUTIERREZ existió una verdadera relación laboral que estuvo vigente entre el 14 de abril y el 10 de agosto de 2011. ii) ABSOLVER a las demandadas de las pretensiones.

Para tomar estas determinaciones, argumentó en síntesis a partir de la valoración de los medios probatorios, que el demandante demostró la existencia de un contrato de trabajo con INTELSEER S.A.S., pero incumplió con las cargas probatorias porque no demostró el hecho del despido, la jornada laboral ni el salario, lo que impone proferir sentencia absolutoria.

4. EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE⁵

Inconforme con la decisión, el apoderado del actor interpuso recurso de apelación concretando su inconformidad en relación con los siguientes aspectos: **i)** En lo referente al **salario y horario** señala que, en el acápite de pruebas están las de requerir a las codemandadas para que envíen documentos tales como hoja de vida, pagos por salarios, afiliaciones a la seguridad social, horarios del trabajador, pruebas que no fueron allegadas. Las compañías asumieron las siguientes conductas procesales, INTELSEER S.A.S. no compareció al proceso y la CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. no concurrió a ninguna de las audiencias. Estas situaciones procesales no merecieron ningún reparo al señor juez, quien al contrario endilgó al demandante la responsabilidad de demostrar los salarios y los horarios, sin tener en cuenta que los pagos siempre fueron realizados en efectivo y que las horas de entrada y salida están en la bitácora allegada al proceso. Se afirmó bajo la gravedad de juramento que el salario era de \$1.800.000 y el horario se prueba con la bitácora. Queda entonces como conclusión que el salario y el horario no pueden demostrarse con los documentos allegados, y alude a las facultades oficiosas del Juez si debe tener a la mano absolutamente todos los elementos para fallar en derecho amén de que las pruebas solicitadas por el actor para completar el acervo probatorio no fueron exigidas ni complementadas con las que presuntamente el Despacho debiera pedir también. **ii)** En relación con la **solidaridad** argumenta que está probada la relación comercial entre INTELSEER S.A.S. y CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A., siendo posible deducir la responsabilidad solidaria de esta última en el pago de las prestaciones sociales y salarios adeudados.

⁵ PDF 52 /carpeta de primera instancia

5. DEL TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA – COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

Con auto de **5 de Febrero de 2019** se admitió el recurso y se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión⁶, pero las partes se abstuvieron de intervenir.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandante. Así, el análisis se contrae a determinar lo siguiente: ¿El demandante probó el salario y el horario de trabajo de forma tal que le permita acceder a las pretensiones relacionadas con las prestaciones sociales y el trabajo suplementario? ¿Existe solidaridad entre INTELSEER S.A.S. y CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. para el pago de las condenas?

6. SOBRE LA PRUEBA DEL SALARIO Y LA JORNADA DE TRABAJO EN EL PROCESO

Para efectuar el análisis debemos partir de la premisa no discutida, referida a que entre la sociedad INTELSEER S.A.S. y el señor FRANCISCO ELADIO VELÁSQUEZ GUTIERREZ existió una verdadera relación laboral que estuvo vigente entre el 14 de abril y el 10 de agosto de 2011, **conclusión definida en la primera instancia** y que no fue recurrida.

En relación con las CARGAS PROBATORIAS de las partes, debe destacarse que según el **artículo 167 del CGP** aplicable en este proceso por remisión analógica del **artículo 145** del C. de P. Laboral, son los demandantes quienes tienen la carga de probar los supuestos de hecho de las normas que consagran las pretensiones que demanda. De otro lado, en el artículo 60 del C. de P. Laboral y de la Seguridad Social se establece:

“el juez al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”⁷

Y el **artículo 61** del mismo estatuto procesal, reza:

“Libre formación del convencimiento. El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad *ad substantiam actus*, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”⁸.

Según el conjunto de disposiciones citadas, si bien el juez debe valorar la totalidad de los medios de prueba que se allegaron al proceso conforme las normas de la sana crítica, esta situación no exime al demandante de cumplir con la carga procesal que

⁶ PDF 03 de la C02 de la carpeta de segunda instancia.

⁷ Ver el artículo 187 del CPC

le incumbe, en el sentido de otorgar al juez la certeza sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el supuesto de hecho de la norma en que fundamenta el *petitum*, pues de lo contrario, al momento de decidir, el juez no podrá reconocer el derecho que se pretende.

Así, ha sido reiterado el criterio jurisprudencial según el cual, no basta con acreditar la existencia de la relación de trabajo a partir de la presunción consagrada en el artículo 24 del C.S.T., pues al demandante le corresponde otorgar al Juez la certeza sobre los extremos temporales de la relación y los parámetros para poder liquidar los diferentes conceptos prestacionales o las indemnizaciones a que hubiere lugar, porque al Juez le está vedado efectuar cálculos imaginarios para definir el salario, si tampoco se cuenta con claridad frente a la jornada.

“La presunción legal establecida en el artículo 24 del C.S.T. no define necesariamente la contienda con la imposición del derecho invocado. Su virtud consiste simplemente en relevar al trabajador de toda otra actividad probatoria en torno a la existencia del vínculo contractual. Por tanto, quién alegue que prestó servicios personales no puede pretender que la baste la sola existencia del contrato para que se dé por establecido lo relacionado con otros factores o elementos indispensables que permitan determinar el monto y la extensión de los derechos reclamados, como son, entre otros, el **tiempo de servicios con sus límites de iniciación y terminación, el monto de los salarios, etc. Acerca de estos extremos el trabajador debe aducir la prueba correspondiente**”⁹

Este criterio se ha reiterado de manera constante en sentencias como la identificada con el **Radicado 36549 del 5 de agosto de 2009**, en la que luego de analizar la presunción del artículo 24 del CST insiste en que no por ello el demandante queda relevado de otras cargas probatorias, porque al promotor del proceso también le atañe acreditar otros supuestos relevantes dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo el extremo temporal de la relación, **el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización de la terminación del vínculo**, entre otros. Y se trata de un criterio que tiene su origen incluso en providencias más antiguas, de marzo 2 /49, junio 15/49, febrero 16/50, marzo 15/52, diciembre 18/52, en las que expresamente se señaló¹⁰:

“La prueba para demostrar el trabajo suplementario debe ser de una definitiva claridad y precisión y no es dable al Juzgador hacer cálculos o suposiciones para deducir un número probable de horas extras trabajadas”

En razón de los planteamientos esbozados en el recurso, debe la Sala efectuar la valoración del acervo probatorio, siendo claro entonces que para poder liquidar los diferentes conceptos prestacionales debe otorgarse certeza sobre la remuneración,

⁹ Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 15 de diciembre de 1965.

¹⁰ Postura reiterada en sentencia **CSJ SL del 9 de agosto de 2006 Radicado 27064**, así como la **SL9318-2016, SL7660-2017, SL1064-2018 y SL 1174 - 2022**

porque a la Sala le está vedado efectuar cálculos imaginarios para definir el salario si tampoco se cuenta con claridad frente a la jornada; siendo claro que el hecho de que no se acredite de manera exacta el salario expresado en la demanda no implica que se deban desconocer los derechos mínimos e irrenunciables de quién acredita la existencia de un vínculo laboral, siempre y cuando este se pueda dar por establecido. Y en relación con el salario, es claro que de acuerdo con las normas legales, un trabajador debe percibir al menos el salario mínimo legal mensual vigente para cada año, si en el mes labora 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Adicional a lo anterior, se puede fijar en un valor superior, aunque no coincida con lo afirmado en la demanda, si existen pruebas que permitan establecer la cuantía del salario devengado.

Pues bien, en la diligencia de interrogatorio de parte, el señor FRANCISCO ELADIO VELÁSQUEZ GUTIERREZ afirmó en relación con la jornada y salario, lo siguiente al responder las **preguntas 6 a 8**:

delegárselas a alguien?. Personalmente. 6. Señale si usted debía cumplir un horario de trabajo y en caso afirmativo cual era dicho horario?. El horario normal de ingreso era entre 7 y 8 de la mañana y se hacían jornadas laborales hasta de 10 horas por día y en algunos casos también se cumplía un horario de ½ jornada. También debo agregarle que durante el día se atendían en algunas ocasiones los dos centros de construcción, tanto el de Laureles como el de Caldas o se tenía que trasladar del uno al otro durante el día. 7. Precísele al despacho, de conformidad con lo manifestado por usted, dentro del pacto verbal realizado con la entidad, que condiciones pactaron? Se pactaron trabajar media jornada, pagarme la Seguridad Social y en el caso de tener que ampliar la jornada laboral no había ningún problema. 8. Dígame al despacho cuanto percibía usted como contraprestación por el desempeño de sus labores en las entidades demandadas?. \$1.800.000 por ½ jornada. Me los cancelaba la empresa Intelser Ltda, no de forma oportuna mediante abonos. 9. Diga si para el desarrollo de sus

Así se verifica su ratificación sobre lo afirmado en la demanda en la que se indicó que las labores que realizó fueron prestadas de manera personal, subordinada y con remuneración o pagos por su servicio **bajo un horario de medio tiempo** todos los días, con una asignación mensual de \$1.800.000. En este contexto se destaca por esta Corporación la importancia de su declaración, debiendo resaltar que a partir de la entrada en vigencia del **artículo 165** del Código General del Proceso se introdujo como medio de prueba **la declaración de parte** independiente a la confesión, lo cual se ve reafirmado en el **inciso final** del **artículo 191** del mismo estatuto procesal, que previó la posibilidad de valorarla de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, lo que no va en contravía del principio según el cual a nadie le está permitido

fabricar la propia prueba en su favor, siendo claro que su valoración se está efectuando con el conjunto de las demás declaraciones recaudadas en el plenario y la prueba documental recaudada **(SL 4093-2022)**.

Y si bien ningún documento de los que milita en el expediente¹¹ da fe del monto del salario pactado por las partes ni del trabajo en horas suplementarias, de la prueba testimonial se destacan las afirmaciones del señor **BERTULIO PÉREZ TORO**, quien explicó sobre el particular:

“Diga al despacho si lo sabe, ¿cuáles fueron las condiciones que pactaron las entidades demandadas con el señor Francisco Velásquez en razón del contrato verbal que usted dice celebraron? Se pacto (sic) una asesoría de ½ tiempo a razón de algo así como \$19.000 la hora.

¿Diga al despacho si el demandante debía cumplir un horario de trabajo y en caso afirmativo cual era? Por costumbre el horario de trabajo era en la mañana, **no sé si él pactó así**. En la mayoría de los casos se prolongaba hasta horas de la tarde.

¿Dígale al despacho si sabe, qué tipo de remuneración tenía el demandante cuando laboró para las entidades demandadas? Alrededor de \$19.000 la hora, **no sé si un poco más o un poco menos**.

Pues el testigo **RICARDO ALFONSO ROJAS MORA**¹² desconoce el aspecto relativo a la remuneración y jornada: “No conozco si le hicieron contrato”, “Dígale al despacho si sabe qué tipo de remuneración tenía el demandante cuando laboró para las entidades demandadas? **No lo sé**.”

Ahora, con la demanda se solicitó se librara oficio INTELSE S.A.S. para que allegara original o copia de los documentos que componen la hoja de vida del actor en la que constara fechas de ingreso y retiro, modalidad del contrato, horarios de entrada y salida, días laborados, etc. valores pagados por salarios, registro de afiliación a la seguridad social, etc. La prueba fue decretada por el A quo en la oportunidad procesal pertinente¹³, el oficio fue debidamente elaborado y diligenciado con destino a la oficiada del que no se obtuvo respuesta¹⁴. Pero habiéndose clausurado el debate probatorio, la parte demandante no interpuso recurso alguno, mostrando de este modo conformidad con el material probatorio recaudado¹⁵. Finalmente, es importante hacer especial mención a la denominada “bitácora” allegada al proceso¹⁶ que como bien lo señala la codemandada CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. no cumple con los requisitos para ser considerado como un documento auténtico, pues no existe certeza

¹¹ Página 7 a 28 del PDF 03 y Página 15 a 34 del PDF 13 de la carpeta de primera instancia.

¹² Página 25 a 32 del PDF 27 de la carpeta de primera instancia.

¹³ Página 18 a 23 del PDF 27 de la carpeta de primera instancia

¹⁴ Página 22 y 24 del PDF 27, PDF 28 de la carpeta de primera instancia

¹⁵ PDF 33 de la carpeta de primera instancia

¹⁶ Página 10 – 24 del PDF 03 de la carpeta de primera instancia

sobre la persona que la ha elaborado manuscrito o firmado en los términos del **artículo 244** del Código General del Proceso.

Es claro que con la prueba relacionada no cumplió el pretensor con el deber de probar el salario afirmado en la demanda para liquidar las condenas deprecadas y ante la grave deficiencia probatoria atribuible a la activa, en lugar de absolver al empleador y se debe concluir a partir del acervo probatorio en su conjunto, que el actor por lo menos devengó el salario mínimo en proporción a la jornada laborada de acuerdo con la jurisprudencia analizada. Así, la Sala en aras de garantizar sus derechos concluye frente al salario, que este debe ser el equivalente al **50%** del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2011 al acreditarse en el proceso que **laboró al menos la jornada pactada, que lo fue de medio tiempo (CSJ SL, rad. 34572, 7 jul. 2009 y CSJ SL2696-2015.**

Baste lo expuesto para anunciar que se revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar se liquidarán los créditos laborales causados en los extremos temporales del **14 de abril al 10 de agosto de 2011**. Y se declarará no probada la excepción de prescripción, como quiera que la demanda se instauró el **20 de septiembre de 2011**, de donde se sigue que los derechos causados y exigibles durante el contrato no quedaron afectados por el paso del tiempo en los términos del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo.

Así, efectuados los cálculos sobre la suma de **\$267.800** equivalente a $\frac{1}{2}$ salario mínimo legal mensual vigente para el **2011** que era de \$535.600, más el auxilio de transporte de la época que ascendía a \$63.600 mensuales; se obtienen por la Sala las siguientes sumas:

- \$97.370 por auxilio de cesantía
- \$3.797 por intereses a las cesantías
- \$64.081 por prima de servicios proporcional del primer semestre
- \$33.289 por prima de servicios proporcional del segundo semestre
- \$43.517 a título de compensación por vacaciones.

Finalmente, se resalta por la Sala que también fue pretensión la condena a **indemnización por despido sin justa causa**, pero ésta no fue materia del recurso de apelación, siendo claro que en manera alguna se trata de un derecho irrenunciable en los términos de la sentencia **C 968 de 2003** que al analizar el **artículo 66A** del **Código Procesal del Trabajo** declaró su exequibilidad **en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador.**

7. SOBRE LA PRETENSION DE INDEMNIZACIÓN MORATORIA

Es objeto de pretensión en este proceso, la condena al pago de la indemnización moratoria. Para efectuar el análisis resulta claramente ilustrativo el planteamiento efectuado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia **SL8216-2016, radicación 47048 del 18 de mayo de 2016**, M.P. Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, del que resulta pertinente transcribir algunos apartes:

“Esta Corporación, reiteradamente, ha puntualizado que la sanción moratoria prevista en los arts. 65 del C.S.T. y 99 de la L. 50/1990, **procede cuando quiera que, en el marco del proceso, el empleador no aporte razones satisfactorias y justificativas de su conducta**. Para esto, se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso, y de la globalidad de las pruebas y circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos esgrimidos por la defensa son razonables y aceptables.

De igual modo, la Sala ha estimado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificación de *«otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción»* (CSJ SL9641-2014).

Como puede verse, la jurisprudencia de esta Corte y la interpretación que, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, ha realizado de las disposiciones que prevén las sanciones moratorias, se ha opuesto a cualquier hermenéutica fundada en reglas inderrotables y concluyentes acerca de cuándo procede o no la sanción moratoria o en qué casos hay buena fe o no. **En su lugar, se ha inclinado por una interpretación según la cual, la verificación de la conducta del empleador es un aspecto que debe ser revisado en concreto, de acuerdo con todos los detalles y peculiaridades que aparezcan probados en el expediente**, pues *«no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuando un empleador es de buena o de mala fe»* y *«sólo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro»* (CSJ SL, 13 abr. 2005, rad. 24397).” (**Negrilla intencional de la Sala**)

Y se destaca que en sentencias **SL6232-2016, SL3688-2017, SL7782-2017 y SL2805-2020** se ha indicado que es contrario al recto entendimiento de la indemnización moratoria **excluir su imposición de manera automática y maquinal, bajo la simple consideración de que los montos resultan mínimos, írritos o exiguos**, o se trata de meros *«...saldos insolutos de salarios y prestaciones sociales...»*, pues en todos los casos es preciso analizar de manera ponderada y seria, las condiciones particulares de la situación y la conducta desplegada por el empleador obligado.

Esta Sala de decisión ha auscultado en la foliatura, pero no encuentra ninguna justificación para que **INTELSER S.A.S.** no hubiese cancelado al demandante la liquidación definitiva de prestaciones sociales. En la contestación presentada por la *curadora ad litem* tampoco se ofrece algún planteamiento que permita entender los motivos y razones que llevaron al empleador a incurrir en tan ostensible incumplimiento de sus obligaciones laborales, siendo claro que lo que debe verificarse en este caso concreto no es si la actuación del empleador estuvo gobernada por un ánimo dañino o de mala fe, pues lo que debe constatarse es si en el marco del proceso se aportaron razones satisfactorias y justificativas de su conducta, pues de no ser así, se impone el pago de la sanción.

De acuerdo con el anterior razonamiento, debe señalarse que la conducta asumida por **INTELSER S.A.S.** está lejos del proceder de un empleador conforme a nuestro ordenamiento jurídico, pues siendo deudor obligado al pago de prestaciones sociales, no solo se abstuvo de sufragar lo adeudado desconociendo los derechos mínimos de su trabajador, sino que tampoco tuvo esmero alguno en comparecer al proceso para efectuar su defensa y se abstuvo de allegar la información solicitada mediante el oficio librado por el Despacho ante la prueba oportunamente decretada; comportamiento procesal que muestra su falta de lealtad procesal.

Se **CONDENARÁ** así a **INTELSER S.A.S.** al pago de la indemnización moratoria consistente en el último salario diario de **OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$8.927)** por cada día retardo desde el **11 de agosto de 2011** hasta el pago efectivo de las obligaciones a su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en razón del monto salarial.

8. SOBRE LA OMISIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

En relación con este aspecto debe señalarse que son dos las obligaciones del empleador frente al sistema de seguridad social integral: i) Reportar la novedad de vinculación laboral del trabajador, desde el inicio de la relación laboral; y ii) Efectuar el pago de las cotizaciones cada mes. Si el empleador reporta a su trabajador, y efectúa el pago de las cotizaciones tardíamente, deberá pagar intereses moratorios; y si omite realizar algunos, deberá efectuarlos válidamente de forma retroactiva, asumiendo claro está, el pago de los intereses.

Cosa distinta sucede, cuando el empleador **omite reportar la novedad de afiliación**, aspecto en el que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha presentado una evolución, coordinada y concordante con el espíritu de las nuevas disposiciones que expidió el legislador para contrarrestar las hipótesis de falta de afiliación que afectan la configuración del derecho pensional de los afiliados, con arreglo a los principios de la seguridad social de universalidad, unidad, integralidad y eficiencia. En lo fundamental, esa progresión de la jurisprudencia ha estado encaminada a lograr la financiación plena de las prestaciones, así como unidad en su reconocimiento a través de las entidades de seguridad social. Así, se ha adoctrinado que lo procedente es, reconocer expresamente tales omisiones de afiliación dadas en el pasado y buscar la solución adecuada y suficiente a través del reconocimiento de la respectiva prestación por parte de las entidades de seguridad social, con el consecuente recobro o integración de los aportes y recursos por medio de títulos pensionales que deben pagar los empleadores omisos.

Lo anterior, a partir del **literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993**, que, para el reconocimiento de pensiones de vejez, legitimó la inclusión del “...*tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión...*”; y el **literal d)** de la misma norma, **introducido por virtud del artículo 9 de la Ley 797 de 2003**, que facultó la inclusión del “...*tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador...*”, a partir del cálculo actuarial a cargo del empleador a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.

En efecto, el **Decreto 1887 de 1994** estableció la metodología para el cálculo de los referidos títulos pensionales, y el **artículo 17 del Decreto 3798 de 2003** prescribió que “...en el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a partir de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar estando obligado a hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y la fecha de afiliación tardía, sólo será procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título pensional correspondiente, calculado conforme a lo que señala el Decreto 1887 de 1994”

Así, con fundamento en dichas normas y en los principios que definen y orientan el sistema integral de seguridad social, la Alta Corporación ha precisado su jurisprudencia, para adoctrinar que las variadas problemáticas generadas a raíz de la falta de afiliación al sistema de pensiones, en perspectiva de la consolidación del respectivo derecho, deben

encontrar una solución común, que no es otra que el reconocimiento del tiempo servido por el trabajador, por parte de la entidad de seguridad social respectiva, con el consecuente **traslado de un cálculo actuarial a cargo de la entidad empleadora (SL14388-2015, SL2731-2015, SL2138-2016, SL4072-2017, SL14215-2017, SL2903-2018, SL2636-2018, SL939-2019, SL1356-2019, SL1342-2019, SL5109-2019 y SL1315-2021.**

Pues bien, se ha concluido en el proceso que entre las partes se presentó un contrato de trabajo del **14 de abril al 10 de agosto de 2011**, siendo, así las cosas, y conforme el análisis efectuado en precedencia, se observa entonces que resulta procedente condenar al pago del cálculo actuarial a la administradora de pensiones en la que el actor se encuentra afiliado en los términos del **artículo 3 del decreto 1887 de 1994** por ese período y con base en el salario mínimo legal mensual vigente; ordenando a **INTELSER S.A.S.** radicar dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la solicitud de la liquidación del cálculo actuarial correspondiente y efectuar el pago correspondiente a satisfacción de la entidad.

Debe destacarse que contrario a lo planteado por la curadora *ad litem* de **INTELSER S.A.S.** en la contestación, es claro que se trata de una **obligación de carácter imprescriptible** dado el carácter irrenunciable del derecho conforme a la consolidada línea jurisprudencial tratada en sentencias como la **SL 792 de 2013, SL 975 de 2013, SL 7851 de 2015, SL 1272 de 2016, SL 2944 de 2016, SL 16856 de 2016, SL 738 de 2018, SL 2876 de 2022 y SL 209 de 2023** entre muchas otras, que expone que mientras el derecho pensional esté en formación **la acción para reclamar los aportes pensionales omitidos por la vía del cálculo actuarial no están sometidos a la prescripción**. Explica con la Alta Corporación que los aportes a pensión ostentan el carácter de imprescriptibles dado que son indispensables para la consolidación y financiación de la prestación, y en razón de ello en **SL 975 de 2013** explicó:

[...] teniendo en cuenta ese ideal constructivo y contributivo, que orienta las pensiones de jubilación, lo más justo y adecuado a las normas y principios del sistema de seguridad social, es que el afiliado tenga la oportunidad de enmendar o **perseguir la integración de todos aquellos elementos que contribuyen al nacimiento de su pensión**, o de atacar todas las contrariedades que afecten ese derecho en construcción, **en cualquier tiempo**, de manera que cuando cumpla el último de los requisitos necesarios para tales efectos, pueda empezar a disfrutar de su descanso de una forma remunerada, equilibrada y digna.

9. DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

En el marco de la relación de trabajo, es el **empleador** el responsable de pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos laborales de sus

trabajadores. Pero a la luz de lo previsto en el artículo 34 del CST¹⁷, **el beneficiario del trabajo dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista** por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores¹⁸. Ha indicado la Corte:

Recuérdese que en los términos del artículo 34 del CST, son dos los requisitos para que proceda la solidaridad del contratante frente a su contratista, a saber: ser beneficiario de la obra o del servicio contratado y, *que las actividades ejecutadas por la contratista a favor de la contratante no se traten de labores extrañas a las actividades normales de esta última* (CSJ SL3718-2020).

La finalidad de la consagración de esta responsabilidad del BENEFICIARIO DE LA OBRA frente a los trabajadores de los CONTRATISTAS y la limitación del legislador para excluir las "labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio" ha sido claramente plasmada por la Corte Suprema de Justicia desde la **sentencia del 25 de mayo de 1968**, citada en la jurisprudencia posterior y vigente¹⁹:

[...] no es más que **una manera de proteger los derechos de los trabajadores**, para cuyo efecto **se le hacen extensivas, al obligado solidario**, las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en su calidad **de dueño o beneficiario de la obra contratada**, ante la **usual insolvencia del deudor principal** que no es otro que el empleador.

Más **el legislador**, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, **previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria**, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, **estableció expresamente**, a favor exclusivo de los **trabajadores**, la responsabilidad solidaria del contratista y del **beneficiario** por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, **sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores**.

La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, **no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos en conjunto, sino la ley**; esta es su causa eficiente y las dos convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. **Ellos y la relación de**

¹⁷ **ARTÍCULO 34. Contratistas independientes.** 1. Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. **Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores**, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. [...]

¹⁸ El artículo en mención fue declarado **exequible** por la Corte Constitucional mediante sentencia C-593 del 20 de agosto de 2014.

¹⁹ Radicado 14038 de septiembre 26 de 2000, Radicado 38255 de 2012 Y Radicado 42213 de 2013. Más recientemente en SL 14692 de 2017, SL 4162 de 2021, SL 3111 de 2021 y SL 3774 de 2021 que se funda en SL 7789 de 2016 y sentencia de radicado 38651 de 2014.

causalidad entre las dos figuras jurídicas, son los presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión legal mencionada

[...] ésta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral..., pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. **Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente** y que **el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias**, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de garantía. [...]

(Negrilla intencional de la Sala)

Y en relación con el alcance que se debe dar a la expresión **“labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”** debe resaltarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha desechado la tesis de configurarla como una **actividad indispensable** para el desarrollo de la función específica, poniéndose el acento en el dato de la **actividad inherente al ciclo productivo de la empresa principal**.

De este modo, el beneficiario responderá solo en aquellos casos en que decidió subcontratar una actividad **INHERENTE O CONEXA, NORMAL O CORRIENTE**, es decir, que la hubiese podido ejecutar directamente pero que al decidir entregarla a un tercero, se está librando de asumir el pago de obligaciones laborales. Por ello, para efectuar el análisis en cada caso concreto, debe partirse de la finalidad de la protección consagrada en la norma: Proteger al trabajador frente a ese empleador que en vez de contratarlo directamente debiendo hacerlo, acude a un tercero, para soslayar obligaciones laborales.

Este criterio también encuentra su fundamento en la otra razón para consagrar la responsabilidad solidaria: Las actividades del ciclo productivo se incorporan al producto o resultado final de la beneficiaria tanto si son realizadas directamente como si son encargadas a una empresa contratista, y por ello se justifica la responsabilidad patrimonial de la empresa beneficiaria respecto de los derechos laborales de los trabajadores empleados por el contratista. En este sentido, conviene destacar que para la Alta Corporación la solidaridad se presenta:

[...] cuando la actividad ejecutada por el contratista independiente **cubre una necesidad propia** del beneficiario y, además, cuando constituye una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social, que por lo mismo desarrolla éste.²⁰

Finalmente, en relación con este aspecto, también ha sido un criterio jurisprudencial desarrollado ampliamente el relativo a la **libertad probatoria de los supuestos para que opere la solidaridad: i)** Lo que se analiza **generalmente** es el **OBJETO DEL CONTRATO**, de

²⁰ SL 14692 de 2017.

manera particular cuál fue la labor o la obra contratada entre el **BENEFICIARIO** y el **CONTRATISTA** independientemente de la actividad concreta del trabajador; **ii)** Pero para identificar si se trata de una actividad extraña o normal, también puede analizarse la actividad específica que el trabajador del CONTRATISTA o SUBCONTRATISTA está realizando para la beneficiaria y si es normal o extraña a su actividad principal²¹.

Por otro lado, sobre la responsabilidad del contratante solidario, cabe mencionar que la Jurisprudencia ha reconocido que la norma –artículo 34 del CST- no hace distinción entre los salarios, las prestaciones e indemnizaciones a las que tiene derecho el trabajador, por lo que no es admisible hacer interpretaciones restrictivas en este sentido excluyendo algún concepto que se encuadre en dichas categorías, siendo el llamado a responder solidariamente responsable de las condenas que incluso **tienen su origen en el actuar negligente del empleador**, pues es garante de las obligaciones; esto no es que se haga extensiva la responsabilidad o la culpa del empleador al contratante, sino que se entiende que como garante responde en virtud de la solidaridad²². Remitiéndose a su propia jurisprudencia, ha dispuesto la Corte²³:

Esta figura jurídica [la solidaridad] no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral (como parece hacerlo la oposición), pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de garantía. Y no por ello puede decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al Municipio demandado. No, la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del

²¹ Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral. **Radicado 14038 de septiembre 26 de 2000: La construcción del MATADERO** del Municipio de Rionegro; **Radicado 25505 del 30 de agosto de 2005: EL MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LA MAQUINARIA DE LA EMPRESA CUANDO SE TRATA DE LA QUE UTILIZA EN EL PROCESO PRODUCTIVO** ; **Radicación No. 27736 del 22 de octubre de 2007** : LA construcción de casas de INTERÉS SOCIAL para la CAJA DE VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES; **Radicado 27.623 del 10 de marzo de 2009- LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA CIVIL (banda transportadora) - QUE ESTÁ RELACIONADA CON EL PROCESO PRODUCTIVO** de CEMENTOS DIAMANTE DE IBAGUÉ S.A. ; **Radicado 35490 del 19 de agosto de 2009** - La CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA CIVIL DENTRO DE LA EMPRESA - un techo en estructura metálica para las instalaciones de la empresa beneficiaria: AUNQUE ERA UNA OBRA OCASIONAL, se consideró que LA ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR ERA CONEXA, PROPIA O SIMILAR CON LA DE LA BENEFICIARIA: DE HECHO , HABIA PRESTADO SUS SERVICIOS ANTES COMO TRABAJADOR DE LA BENEFICIARIA; **SL 485 – 2013 - Radicación n° 34.260 – 24 de julio de 2013**. Labores de “**de conexión y reposición de energía eléctrica**” que delegó CODENSA S.A. empresa que se dedica a la DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA; **Radicado 35570 de 2010** , ECOPETROL delegó el MANTENIMIENTO DE UNOS TANQUES DONDE SE DEPOSITA EL PETRÓLEO; **Radicado 42213 del 24 de julio de 2013: EMPRESA DE GASES DE OCCIDENTE delega en una empresa la CONEXIÓN DE GASODEMESTICOS PARA EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO**; **Radicado 33082 del 2 de junio de 2009; Radicación No. 35864 del 1 de marzo de 2010 y Sentencia SL 4400 - Radicación n° 39000 – 26 de marzo de 2014**.

²² SL 1910 de 2019, que cita además sentencia SL 35938 de 2011 y SL 14038 de 2000.

²³ Apartado de la sentencia **SL 14038 de 2000**, citado en sentencia **SL 1910 de 2019**.

Trabajo) que de ella emanan son exigibles a aquel en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes.

(Negrita intencional).

Respecto de esos razonamientos, se impone recordar que está demostrado: **i)** Que INTELSEER S.A.S fue empleadora del demandante. **ii)** Que este fungió como ingeniero hidrosanitario en el marco del Contrato de prestación de servicios F09-INO2-CC²⁴ que INTELSEER S.A.S suscribió con la CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. con el objetivo de,

(...) ejecutar con base en el Sistema De Gestión de Calidad, los SERVICIOS PROFESIONALES EN **ASESORIA HIDROSANITARIA**, de todas las obras del proyecto **ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO, OBRAS EXTERIORES, URBANISMO DE LAS ESTACIONES DE POLICIA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LAURELES Y CALDAS –ANTIOQUIA.**

iii) El objeto social de la CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A.²⁵ es *I) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS CIVILES Y URBANÍSTICOS DE CUALQUIER GÉNERO, NATURALEZA O DESTINACIÓN (...) III) REALIZAR OBRAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS (...) V) PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA, DISEÑO, ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA, MIXTA O PRIVADA, EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTERIOR (...).* **iv)** Y en relación con las funciones que desempeñaba el demandante, los testigos RICARDO ALONSO ROJAS MORA y BERTULIO PEREZ TORO informaron que se encargaba de la asesoría en la parte hidráulica y sanitaria en la obra que se estaba ejecutando en las estaciones de Policía del barrio Laureles en Medellín, así como en el Municipio de Caldas.

Siendo, así las cosas, en criterio de esta corporación no queda duda que la sociedad CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A. es solidariamente responsable de las condenas proferidas en este proceso en contra de INTELSEER S.A.S. por ser la beneficiaria del trabajo o dueña de la obra que ésta realizaba, y por ser tal labor subcontratada una actividad inherente o conexas, normal o corriente en los términos analizados en esta providencia, siendo claro que lo encomendado a la contratista cubre una necesidad propia de la beneficiaria y constituye una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social.

10. COSTAS

²⁴ Página 15 a 21 del PDF 13 de la carpeta de primera instancia

²⁵ Página 9 a 14 del PDF 13 de la carpeta de primera instancia

Al prosperar el recurso de apelación y revocarse la sentencia en su integridad se condenará en costas a las demandadas en las dos instancias de conformidad con el mandato del artículo 365 del CGP. Las agencias en derecho en segunda ascienden a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a cargo de cada una de las demandadas.

11. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín al DECLARAR que entre la sociedad INTELSE S.A.S. y el señor FRANCISCO ELADIO VELÁSQUEZ GUTIERREZ existió una verdadera relación laboral que estuvo vigente entre el 14 de abril y el 10 de agosto de 2011

SEGUNDO: REVOCAR los numerales **SEGUNDO a CUARTO** para en su lugar condenar a **INTELSE S.A.S.** y solidariamente **CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A.** al pago de los siguientes conceptos:

- **NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$97.370)** por auxilio de cesantía.
- **TER MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$3.797)** por intereses a las cesantías.
- **SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS (\$64.081)** por prima de servicios del primer semestre.
- **TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$33.289)** por prima de servicios del segundo semestre.
- **CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS (\$43.517)** a título de compensación por vacaciones.
- **OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$8.927)** por cada día retardo desde el 11 de agosto de 2011, hasta el pago efectivo de las obligaciones a su cargo, por concepto de indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

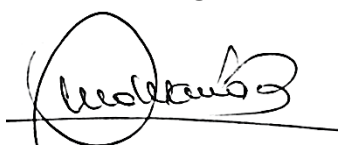
CONDENAR a **INTELSE S.A.S.** y solidariamente **CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A.** a radicar dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia ante la Administradora de Pensiones en la cual se encuentre afiliado el señor FRANCISCO ELADIO VELÁSQUEZ GUTIERREZ, la solicitud de la liquidación de cálculo actuarial por el período **14 de abril al 10 de agosto de 2011** con base en un salario mínimo legal mensual vigente. El pago correspondiente se efectuará a satisfacción de la entidad.

TERCERO: No se declara probada la excepción de prescripción propuesta. Las demás resultan resueltas de manera implícita con la decisión.

CUARTO: Costas en ambas instancias a cargo de **INTELSER S.A.S.** y **CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A.** Se fijan como agencias en derecho en esta instancia una suma equivalente a **1 s.m.l.m.v** a cargo de cada una de las codemandadas

Lo anterior se notifica por EDICTO, vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quien en ella intervinieron.

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE

MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA
SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



RADICADO: 05001 31 05 004 2011 01100 02

SENTENCIA del //12/05/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EsplG3fHol1Kofz5WrX00zEBK0e4r1Htcy8_ukcOjKhxbQ?e=Rf4dak